



Nota de prensa. Bruselas 17 de abril 2013

“Empresas europeas no respetan derechos humanos en Guatemala”

Bruselas, 17 abril 2013. Con el objetivo de denunciar el incremento de las violaciones a los derechos humanos como consecuencia de las inversiones europeas en Guatemala, dos delegadas del movimiento social indígena y feminista guatemalteco, han visitado el Parlamento Europeo y el Servicio Europeo de Acción Exterior, para exigir a las instancias de la UE que los derechos humanos vuelvan a ser una prioridad fundamental de sus políticas y, que sus miembros respondan por el actuar de sus empresas.

Natalia Atz Sunuc, coordinadora de CEIBA/Amigos de la Tierra Guatemala, denunció ante el Servicio Europeo de Acción Exterior, que los movimientos sociales, comunidades locales y defensores de derechos humanos críticos al modelo extractivo son criminalizados por su activismo: “Con esta persecución y encarcelamiento, se trata de implantar una política de terror y represión similar a la que vivimos durante los años 80 . Actualmente los campesinos e indígenas somos estigmatizados como terroristas simplemente por tratar de defender nuestros derechos de manera pacífica”, afirma Natalia Atz Sunuc.

En un contexto de desalojos forzosos y remilitarización , la violencia sexual contra las mujeres se usa como una herramienta para intimidarlas, y de esta manera inhibir su participación en la defensa de los territorios, explicó a la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Paula del Cid, de la Asociación Feminista La Cuerda, delegada de la Alianza Feminista de Guatemala.

En junio de 2011, cuarenta Parlamentarios europeos, de cinco grupos políticos, ya habían denunciado esta situación ante la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, Catherine Ashton, y hoy, dos años después, la Unión Europea sigue sin pronunciarse públicamente sobre estos hechos.

El proyecto hidroeléctrico de la empresa española, Hidralia Energía, en Santa Cruz de Barillas, es un claro ejemplo de los llamados proyectos de desarrollo que se instalan en Guatemala sin el consentimiento de la comunidad local y es el principal responsable de la criminalización de los campesinos e indígenas de la zona. La empresa se estableció en Guatemala después de haber estado involucrada en un caso de corrupción y tráfico de influencias en España.

Desde Bruselas, las organizaciones de la sociedad civil Amigos de la Tierra Europa, Aprodev, CIFCA y Grupo Sur, piden a la Unión Europea mayor coherencia en sus políticas de comercio e inversiones, y con sus compromisos en materia de derechos humanos, ya que por el momento se da la entrada de inversión europea sin mecanismos de control vinculantes que garanticen el respeto de los derechos humanos. Tanto el Gobierno de Guatemala como el gobierno español en el caso de Hidralia, deben asumir su responsabilidad para que éstos sean respetados, protegidos y cumplidos, y para que se repare el daño causado a la población local.